

Santiago de Cali, agosto treinta y uno (31) de dos mil veintidós (2.022)

Auto No. 466

EXPEDIENTE	76001-33-33-002-2018-00067-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - OTROS
DEMANDANTE	CARMEN ESPERANZA HERNANDEZ PORTILLO Y OTROS restrepo-abogado@hotmail.com
DEMANDADO	MUNICIPIO DE PALMIRA notificaciones.judiciales@palmira.gov.co
LITISCONSORTE	VALHER SANTAMARIA LTDA. afcs0929@yahoo.es
TEMA	CONFIRMA PROVIDENCIA QUE DECLARÓ LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

I. OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Se resuelve el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra el auto No 972 del 29 de junio de 2021 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali, que terminó el proceso por caducidad del medio de control.

II. ANTECEDENTES

Los señores CARMEN ESPERANZA HERNANDEZ PORTILLO, actuando en nombre propio y representación del menor de edad EDIMER ALEXANDER GOMEZ HERNANDEZ, MARIO FERNANDO GOMEZ DELGADO, KAROL JIZETT ARCE RUALES, JUAN CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ, EWIN ARLEY HERNANDEZ HERNANDEZ y DANLY YERALDIN ENRIQUEZ GOMEZ, quien actúa en nombre propio y representación de su hijo menor de edad BREYNER SAMUEL HERNANDEZ ENRIQUEZ; VISITACION RIASCOS PANTOJA, OSCAR BURBANO CHICAIZA, RICAR EMRSON BURBANO RIASCOS; DIANA CAROLINA GIL AMEZQUITA y JAMIE ANDRES SERNA GONZALEZ, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor de edad LINDSEY ANDREA SERNA GIL y BELLARMINA SERNA GONZALEZ; OSCAR ALEXANDER BURBANO RIASCO y DIANA LICETH FIGUEROA PINZA, quien actúa a nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad ISABELLA FIGUEROA PINZA, STEFANY FIGUEROA PINZA y JHOEN FIGUEROA PINZA presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del MUNICIPIO DE PALMIRA para que se hicieran las siguientes declaraciones (Pág. 58 expediente digitalizado archivo-1): “Declarar la nulidad del proceso policivo instaurado por VALHER

SANTAMARIA LTDA. Ante la inspección urbana de Policía de la casa de justicia de Palmira, avocada por la resolución Auto No 03 del 01 de abril de 2014 y subsiguientes, así como la resolución No 05 del 29 de julio de 2015 que resolvió el proceso policivo, la operación administrativa que realizó el desalojo el 23 de octubre de 2017 y el acto ficto y presunto que no fue desatado por la administración”

Mediante auto No 972 del 29 de junio de 2021 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali terminó el proceso en la etapa de saneamiento, por caducidad del medio de control.

Fundamentos del recurso de apelación (archivo 06audienciainicial29-06-2021 - minuto 15:55 - expediente digitalizado).

La parte accionante fundamentó su recurso de apelación en los siguientes argumentos:

En primer término, da lectura a lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, como soporte normativo para su recurso.

Luego, indicó que el daño en el caso de los demandantes se produjo en dos escenarios: (i) el proceso policivo que declaró en ruina los bienes objeto del proceso y (ii) con el desalojo, que se cumplió el 23 de octubre de 2017.

Que el término para demandar la legalidad del acto debe contarse a partir del momento en que se dio ejecución al acto que ordenó el desalojo y demolición de los inmuebles y no desde el momento en que se expidió el acto dentro del proceso policivo.

Resalta que según lo dispuesto por el artículo 163, literal “d” de la Ley 1437 de 2011 cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la **ejecución** del acto administrativo, que en este caso fue el desalojo de los demandantes que tuvo lugar el 23 de octubre de 2017.

III. CONSIDERACIONES

1. Planteamiento de la cuestión a resolver.

Con fundamento en el recurso de apelación presentado por la parte demandante corresponde a la Sala determinar si el término de caducidad debe ser contabilizado desde el momento en que la administración ordenó el desalojo y demolición de los inmuebles invocados en la demanda o, por el contrario, a partir del día en que se ejecutó la orden de desalojo y demolición, esto es, a partir del 23 de octubre de 2017.

2. Antecedentes fácticos relevantes para la resolución de la cuestión planteada.

Hechos narrados en la demanda:

La señora **CARMEN ESPERANZA HERNANDEZ PORTILLO** es poseedora desde el 09 de marzo de 2012 de un bien inmueble ubicado en la CALLE 66 N° 23-54, de Palmira reconocida como la CASA 09, de propiedad de la constructora Santa Belén S.A en el año 2012. El Lote contaba con su respectiva casa en obra negra, construida

con un total de 87,21 metros cuadrados, distribuido en dos plantas, la primera con 42,95 metros y la segunda con 44, 26 metros cuadrados, contaba con sala, cocina enchapada, patio, lavadero, escalera al segundo piso y baño. En la casa vivían además de la actora, **MARIO FERNANDO GÓMEZ DEIGADO, KAROI JIZETT ARCE RUAIES, JUAN CAREOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EWIN ARIEY HERNÁNDEZ HERNANDEZ** y la menor de edad **DANLY YERALDIN ENRÍQUEZ GÓMEZ, NUIP 1113687201**, que fueron desalojados y afectada su posesión por actuación irregular de la Inspección de Policía de la Casa de Justicia de Palmira- Valle del Cauca.

Por su parte, **VISITACIÓN RIASCOS PANTOJA** es poseedora desde el 09 de marzo de 2012 de un bien inmueble ubicado en la **CALLE 66 N° 23-06**, reconocida como la **CASA 01** de Palmira, de propiedad de la constructora Santa Belén S.A en el año 2012. El Lote cuenta con su respectiva casa en obra negra, construida con un total de 117,75 metros cuadrados, distribuido en dos plantas, la primera con 59,00 metros y la segunda con 58,75 metros cuadrados, contaba con sala, cocina enchapada, patio, lavadero, escalera al segundo piso y baño. En la casa vivían además de la actora, **OSCAR BURBANO CHICAIZA, RICAR EMERSON BURBANO RIASCOS, OSCAR ALEXANDER BURBANO RIASCO** y **DIANA IICETH FIGUEROA PINZA**, y los menores de edad **ISABELLA FIGUEROA PINZA, NUIP 1114247234, STEFANY FIGUEROA PINZA, NUIP 1114244124, y JHOEN FIGUEROA PINZA** que fueron desalojados y afectada su posesión por actuación irregular de la Inspección de Policía de la Casa de Justicia de Palmira- Valle del Cauca.

BELLARMINA SERNA GONZÁLEZ es poseedora desde el 09 de marzo de 2012 de un bien inmueble ubicado en la **CALLE 66 N° 23-42**, reconocida como la **CASA 07**, de propiedad de la constructora Santa Belén S.A en el año 2012. El Lote cuenta con su respectiva casa en obra negra, construida con un total de 1111,50 metros cuadrados, distribuido en dos plantas, la primera con 55,70 metros y la segunda con 55,80 metros cuadrados, contaba con sala, cocina enchapada, patio, lavadero, escalera al segundo piso y baño. En la casa vivían además de la actora, **DIANA CAROLINA GIL AMEZQUITA Y JAIME ANDRÉS SERNA GONZÁLEZ** además de su hija **LINDSEY ANDREA SERNA GIL** que fueron desalojados y afectada su posesión por actuación irregular de la Inspección de Policía de la Casa de Justicia de Palmira- Valle del Cauca.

Actuaciones administrativas evidenciadas en los anexos de la demanda.

Mediante auto No 25 del 12 de mayo de 2015 la inspección de policía Urbana de la Casa de Justicia de Palmira resolvió (Pág. 63 archivo 2 expediente digitalizado):

“Avocar el conocimiento del presente proceso administrativo de policía de conformidad con las normas citadas, dar trámite a la querrela policiva AMENZA DE RUINA de los inmuebles que habitan las personas indeterminadas en el predio, Ubicado en La Urbanización Bosques de Belén Calle 66 entre carreras 23 y 24 del Municipio de Palmira según certificado de tradición de la Oficina de Registros e instrumentos públicos de Palmira predio que pertenece a la Sociedad VALHER SANTAMARIA LTDA de acuerdo a la escritura pública de Reloteo No 1717 del 17 de Junio de 1997 de la Notaría Tercera de Palmira. Se identifica por los siguientes linderos: NORTE: entre los puntos del polígono 11 y 12 en distancia de 103,76 M,



con la calle 66A; SUR: entre los puntos del polígono 7 y 8 en distancia de 112.49 metros con la Calle 66A. ESTE; entre los puntos del polígono 8, 9, 10,11 en distancia de 32.56M con la carrera 23; OESTE: entre los puntos del polígono 12.13, 6.7 en distancia de 34.37 M con la carrera 24, Este predio está conformado por 35 lotes. De los cuales sobre 17 lotes se encuentran viviendas en proceso de construcción. Predio este con matrícula inmobiliaria 378-0104463 de la oficina de Registros de Instrumentos públicos de esta ciudad.

(...)

ARTICULO SEXTO: Escuchar en descargos a la representante legal de la Sociedad VALHER LTDA propietaria y poseedora de los inmuebles materia de la solicitud. Escuchar a los moradores de las 17 viviendas (personas indeterminadas que ahí se encuentren pernotando)

(...)

ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente al propietario y/ ocupante del inmueble con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, de no surtir la notificación personal, la misma se surtirá por edicto.

(...)”

Visible en la página 69 del archivo 02 expediente digitalizado obra copia del Auto No 29 del 30 de junio de 2015 proferido dentro del “PROCESO: DECLARATORIA DE BIENES QUE AMENAZAN RUINA EN LA “URBANIZACION BOSQUES DEL EDEN, UBICADOS EN LA CALLE 66 ENTRE CARRERAS 23 Y 24 DE PALMIRA”, decisión mediante la cual se “corre traslado del Informe pericial, presentado por el ARQUITECTO LUITPRANDO MUÑOZ SILVA; Profesional inscrito en la lista de auxiliares de la justicia “a las personas que están habitando los predios y a la doctora NEYDA CRUZ representante legal de la SOCIEDAD VALHER SANTAMARIA L.T.D.A”.

En el auto se evidencia que ya la inspección de policía Urbana de la Casa de Justicia de Palmira tenía plenamente identificadas a las personas que habitaban los predios objeto de solicitud de demolición por amenaza de ruina, en donde se encuentran relacionados los hoy demandantes.

SOLICITANTE: SOCIEDAD VALHER SANTAMARIA L.T.D.A.	
Para dar cumplimiento al: procedimiento policivo y al debido proceso el despacho corre traslado del Informe pericial, presentado por el ARQUITECTO LUITPRANDO MUÑOZ SILVA; Profesional inscrito en la lista de auxiliares de la justicia, según lo establecido en la Ordenanza 343 de 2012 Código Departamental de Policía en sus artículos 274,275 y 329. Se corre traslado a las personas que están habitando los predios y a la doctora NEYDA CRUZ representante legal de la SOCIEDAD VALHER SANTAMARIA L.T.D.A	
Señora. VISITACION RIASCOS PANTOJA	Casa No 1
Señora. MONICA ALEXANDRA REINA PEREZ	Casa No 2
Señora. ROSA ISABEL SUAREZ RIVERA	Casa No 3
Señora: GISCELA VIVEROS VERGARA	Casa No 4



ALCALDÍA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	OFICIOS	TRD-1148.26.2
--	---------	---------------

Señora: YEIMMY JOHANNA PORRAS MOLINA Casa No. 5

Señora: GLADYS PORRAS MOLINA Casa No. 5

Señora: MARIA EDILMA GUTIERREZ FERNANDEZ Casa No. 6

Señora: BELARMINA SERNA GONZALEZ Casa No. 7

Señor: ANDRES FELIPE SERNA SERNA Casa No. 8

Sra: CARMEN ESPERANZA HERNANDEZ PORTILLO. Casa No.9

Señor: CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ Casa No.10


Señora: MARIA ELICENIA GUTIERREZ DE UNI Casa No.11

Señora: ALEXANDRA IBAÑEZ AMAYA Casa No.12

Señora: LILIA OMAIRA CALVACHE CUCHALA Casa No.13

Señor: GERARDO OSWALDO MARTINEZ GUTIERREZ. Casa No.14

 Palmira	CASA DE JUSTICIA PALMIRA - CALLE 57 # 44-22 BICAMITOS casadejusticiapalmira@hotmail.com PBX: 2758020 FAX: 2758010 www.palmira.gov.co Código Postal: 763631	Página 2 de 3
--	--	------------------

 ALCALDÍA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	CÓDIGO: PG-GCP-100
	PROCESO: GESTIÓN DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	SUBPROCESO: CASA DE JUSTICIA	FECHA: 30-06-2015
	OFICIOS	TRD-1148.26.2

Señora: ADELA SANCHEZ Casa No.15

Señora: MARIA PEREGRINA BOLAÑOS Casa No.16

Señor: JOSE JAIR SANCHEZ Casa No.17


ANDRES FERNANDO ROCHA ALVAREZ
Inspector de Policía Casa de Justicia

Mediante resolución No 05 del 29 de julio de 2015 la Inspección de Policía de la Casa de la Justicia del Municipio de Palmira Valle resolvió declarar que las construcciones ubicadas en la calle 66 entre carreras 23 y 24 de la Urbanización Bosques de Belén se encontraban en estado de ruina e inminente peligro para sus moradores y en consecuencia ordenó el desalojo y demolición de las construcciones (Pág. 7 archivo 04 expediente digitalizado).

Del escrito de remisión del expediente por parte de la Inspección Urbana de Policía de Palmira a la Gobernación del Valle del Cauca de fecha 23 de septiembre de 2015 se extractan los siguientes apartes (Pág. 5 archivo 3 expediente digitalizado):

“Me dirijo respetuosamente para manifestarle que remito a su despacho el Expediente Radicado al No.1148.26.2014 Proceso de Querella Policiva por Demolición de Bienes que Amenazan Ruina ubicados en la calle 66 de propiedad de la Sociedad Valher Ltda. que se adelanta en la Inspección Urbana de Policía Casa de Justicia Palmira, dentro del cual se profirió Resolución No. 05 de fecha 29 de Julio del 2015.

Una vez notificada en debida forma a los terceros intervinientes interpusieron Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación mediante escrito de fecha 10 de agosto del año que avanza.

Procedió la Inspección Urbana de Policía Casa de Justicia a dar el trámite correspondiente y fue así como expidió la Resolución No. 06 de fecha agosto 18 del año que transcorre, confirmando en todas sus partes la Resolución No. 05 del 29 de julio del 2015.

(...)

Es así como los terceros intervinientes una vez ejecutoriada la Resolución 06 del 18 de agosto del 2015 procedieron a interponer nuevamente recurso de reposición y en subsidio el de queja contra la mencionado Acto Administrativo.

La Inspección Urbana de Policía Casa de Justicia de Palmira le dio trámite al mencionado escrito mediante Auto No. 38 de fecha 10 de septiembre de 2015, el cual fue notificado a los terceros intervinientes en debida forma, en el mismo acto se les informo que el Recurso del recurso queja se le correría traslado a la Gobernación del Valle por Competencia para que resolviera de fondo sobre el asunto.”

Visible en la página 8 del archivo 3 en el expediente digitalizado obra oficio de fecha 11 de noviembre de 2015 en el que el Inspector de Policía Urbana de Palmira solicita a la comandante de la Policía de Palmira *“fijar Nueva fecha a los oficiales del ESMAD, Para el desalojo de los ocupantes de predios que amenazan ruina Hacienda Belén.*

(...)

Cordial saludo, la presente es con el objetivo de solicitar el aplazamiento y fijación de nueva fecha para la práctica de la diligencia de desalojo de los ocupantes de las viviendas que amenazan ruina en la Hacienda Belén predios de Valher Santamaría Ltda.

La anterior solicitud se debe a que los habitantes de dichos predios hicieron uso de un recurso de queja, el cual se corrió traslado a la Oficina Jurídica de la Gobernación, por ser una segunda

instancia, éste se presentó el día 23 septiembre de 2015 y hasta la fecha no se han pronunciado sobre el mismo; es una obligación legal resolverla, comunicarla, notificarla, dejar el auto en firme y regresarla a mi despacho para la fijación de una nueva fecha, para la práctica de la diligencia.

Esta solicitud se hace por motivos legales, ya que el incumplimiento de este procedimiento nulificará cualquier actuación policiva a practicar, indebida notificación por parte del Ente Gubernamental y se perdería todo lo actuado a la fecha.”

Visible en la página 25 archivo 4 expediente digitalizado obra copia de escrito presentado por las señoras **CARMEN ESPERANZA HERNANDEZ, GISELA VIVEROS, VISITACIÓN RIASCOS PANTOJA, BELLARMINA SERNA y ROSA ISABEL SUAREZ** dirigido al Inspector de Policía Urbano de la Casa de Justicia de Palmira de fecha 04 de diciembre de 2017 en el que solicitan:

“Con fundamento en el artículo 285 del C.G.P y 290 de la Ley 1437 de 2011, presentamos recurso de apelación respecto de la providencia que ordena la Demolición de la “Urbanización Bosques de Belén” ubicada en la calle 66 entre carreras 23 y 24 de Palmira y su respectiva notificación; por los siguientes motivos:

1 La Resolución N° 05 del 29 del mes de julio de 2015, no ordenó el desalojo y demolición total de los predios ubicados en la Urbanización Bosques de Belén por lo tanto, solicitamos: ¿cuáles son los predios a desalojar y demoler individualmente?

2. A la fecha cursa acción de tutela contra su despacho, el municipio y otras entidades administrativas, en el juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira- Valle del Cauca, bajo la partida 2017-300-01, sin que hasta la fecha se hay resuelto ese recurso judicial.

3 Como el proceso de policía cursado fue sobre Amenaza de Ruina, sin que se discutiera por su esencia los derechos posesorios que tenemos interrumpidamente desde el año 2012, solicitamos se nos informe antes de proceder al desalojo:

Cuando se va a realizar la demolición de los inmuebles ubicados en la “Urbanización Bosques de Belén”.

Cuál es la fecha exacta que el Municipio de Palmira- Valle del Cauca, restituirá a los poseedores la posesión de los predios ubicados en la “Urbanización Bosques de Belén”, dado que el desalojo es transitorio y no una medida definitiva.

(...)”

3. Análisis de la cuestión planteada.

El literal d del numeral segundo del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dispone:

“(…) La demanda deberá ser presentada:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)

*d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, **la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;***

(...)”

De acuerdo con la interpretación que de este literal ha hecho el H. Consejo de Estado, debe entenderse que el término de caducidad para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, comienza a contabilizarse a partir de que opere el primer medio por el cual se haya tenido conocimiento de la existencia del acto administrativo al cual se le atribuye la causación del perjuicio que se pretende sea resarcido, y no resulta potestativo escoger la mejor opción de ellas en detrimento del criterio objetivo que rige el estudio de la caducidad de los medios de control.

En sede de tutela el H. Consejo de Estado conoció de un caso de condiciones fácticas similares al que aquí se debate, donde se solicitaba el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y libre acceso a la administración de justicia por la declaratoria de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento en un proceso donde se pretendía la nulidad de la *“Resolución de julio 5 de 2018, emitida por el Inspector de Espacio Público de Envigado, la cual fue confirmada por resolución No. 5714, del 31 de julio de 2018, por la cual se ordenó el desalojo y demolición del establecimiento de comercio PUENTE PÉRGOLA”, propiedad del señor NICOLÁS EMILIO MARTÍNEZ GARCÍA*”.

En esa oportunidad el órgano de cierre negó el amparo solicitado con fundamento en las siguientes consideraciones:

*“Como se advierte de la lectura de los preceptos anteriormente transcritos, el inicio del término para contabilizar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se rige «a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo». **Es decir, el primer medio por el cual se tenga conocimiento de la existencia del acto administrativo.***

*En cuanto a la figura de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cabe destacar que su estudio se rige por un **criterio objetivo** y no puede estar sometido al arbitrio o condiciones subjetivas de las partes. Se considera que la verificación del presupuesto procesal de la caducidad es objetivo, en tanto que el funcionario judicial debe validar el término en el que debió ser promovido el medio de control y constatar que la parte demandante, en efecto, haya satisfecho esta carga.*

(...)

Con fundamento de las anteriores premisas, se tiene que, tal como lo señaló el juez contencioso en la decisión aquí enjuiciada, el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se contabiliza a partir del día siguiente en el que se tuvo conocimiento del acto administrativo, ya sea a través de la comunicación, notificación, publicación o ejecución del mismo.



En ese orden de ideas, al estar acreditado en el interior del medio de control objeto de amparo que el acto administrativo por medio del cual finalizó la actuación administrativa, que ordenó el desalojo y demolición del establecimiento de comercio Puente Pérgola, se notificó el 6 de agosto de 2018, es claro que es desde esa fecha a partir del cual se debe contabilizar el término de la caducidad del referido proceso, pues desde ese preciso momento los hoy accionantes tuvieron pleno conocimiento de la existencia del acto administrativo que cuestionan por vía judicial.

Así las cosas, la Sala coincide completamente con el Tribunal accionado cuando afirmó que al momento en que los hoy accionantes presentaron la solicitud de conciliación prejudicial, el término de caducidad estaba más que vencido, en razón a que los cuatro (4) meses que contaban para presentar la demanda fenecieron el 7 de diciembre de 2018.

Ahora bien, el argumento expuesto por el apoderado judicial de los accionantes consistente en que el término de la caducidad se debía contabilizar a partir del 16 de noviembre de 2018, fecha en que se llevó a cabo el desalojo y demolición del establecimiento de comercio, porque, a su juicio, desde ese momento es que advirtieron los perjuicios ocasionados, no es de recibo para la Sala, en la medida que fue el mismo acto administrativo el que definió la situación jurídica del predio donde se encontraba ubicado el establecimiento de comercio Puente Pérgola, por lo que resultaba innecesario esperar la ejecución del acto administrativo para promover los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento para ello.

En este punto, es relevante señalar que el principio de publicidad de los actos administrativos tiene como propósito garantizar la oponibilidad frente a los efectos jurídicos que de este se derivan; por lo tanto, desde que se tiene conocimiento de la existencia del mismo, se pueden ejercer los medios de defensa judicial para controvertirlos si así se estima.

En ese contexto, para la Sala la decisión del Tribunal aquí accionado no incurrió en el defecto invocado ni tampoco vulneró las garantías iusfundamentales de las partes del proceso ordinario. Por tanto, se negará la solicitud de amparo promovida por la parte accionante.”

De las documentales visibles en los anexos de la demanda emerge claro para esta Sala, que los demandantes tuvieron conocimiento del contenido de la resolución N° 05 del 29 de julio de 2015, expedida por la Inspección de Policía de Palmira Valle que ordenó el desalojo y demolición total de los predios ubicados en la Urbanización Bosques de Belén, mínimo desde el 10 de agosto de 2015 fecha en la que interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación contra la mentada resolución, por lo que para la fecha de presentación de la demanda el 02 de abril de 2018 (Pág. 35 archivo 3 expediente digitalizado) el medio de control de encontraba más que caducado.

En el expediente se evidencia que los terceros intervinientes, entre los que se encuentran los hoy demandantes, ejercieron diferentes recursos en vía administrativa contra el acto acusado desde el 10 de agosto de 2015; e incluso se evidencia que fueron vinculados al proceso adelantado por la Inspección de Policía desde que se avocó el conocimiento de la querella y se les corrió traslado del informe pericial, lo que permite

¹ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001-03-15-000-2021-00464-00

tener meridiana claridad sobre su intervención activa en el proceso administrativo y que conocieron lo que allí se decidió a partir de la expedición de la Resolución No. 06 de fecha agosto 18 del 2015 acto que resolvió confirmar en reposición todas sus partes la Resolución No. 05 del 29 de julio del 2015, así entonces surge meridiana claridad respecto a que el conteo del término de caducidad debe hacerse a partir de esa fecha y que los accionantes conocieron de la decisión de la administración años antes a que tuviera lugar la ejecución del acto demandado materializándose el desalojo y demolición de los inmuebles (23 de octubre de 2017), tal como lo resolvió el *a quo*.

De conformidad con lo expuesto se confirmará la providencia recurrida.

En razón a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle, Sala de Decisión,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto No 972 del 29 de junio de 2021, proferido por el **Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali** que resolvió dar por terminado el presente proceso por haber operado la caducidad del medio de control, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, una vez se encuentre en firme esta decisión, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Providencia discutida y aprobada en Sala Virtual de la fecha, según consta en acta que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales, atendiendo las circunstancias de salubridad pública que se presentan en el país a raíz del COVID-19 y suscrito electrónicamente en la plataforma <http://samairj.consejodeestado.gov.co> en donde se puede corroborar su autenticidad.



ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada



ANA MARGOTH CHAMORRO BENAIDES
Magistrada



VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado